JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO

Bucaramanga, trece (13) de enero de dos mil veintidós (2022)

Ref. Ejecutivo Javier Andrés Castillo Barragán vs. Deleit productos S.A., Fundación Proservco y Fundación Unidad Social Barrio Adentro Integrantes del Consorcio PAE Santander nos Une 2018. Radicación No. 2019-00248-02.

Se decide el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de los demandantes en acumulación contra el auto proferido el 28 de junio de 2021, dentro del asunto de la referencia, por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bucaramanga.

ANTECEDENTES

Incorporados al plenario los contratos de transacción celebrado entre los apoderados judiciales de los demandantes y el apoderado judicial del Consorcio PAE Santander nos Une 2018 entre las partes para ponerle fin a los procesos ejecutivos seguidos en contra de este último y de sus miembros, el juez de instancia, surtido el traslado de rigor, se abstuvo de impartirle aprobación, por cuanto tal acuerdo no fue suscrito por los representantes legales de cada uno de los entes que hacen parte del consorcio, ya que esta agrupación carece de capacidad para ser parte, a lo que añadió, que uno de sus integrantes, a saber, Deleit Productos S.A., se encuentra en trámite de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades, autoridad a la cual ordenó poner en conocimiento el contrato cuya aprobación es pretendida, exigiendo, además, la notificación de los demandados, so pena de ponerle fin a los procesos por desistimiento tácito.

Inconforme, el apoderado judicial de los demandantes en acumulación apeló dichas decisiones aduciendo, que a pesar de ser cierto que una de las sociedades que integra el consorcio está en reorganización, no lo es que los dineros aquí retenidos sean de su propiedad; lo son, advirtió, del consorcio, "(...) porque solo hasta cuando se liquide dicho consorcio y se determinen los pasivos y activos a favor de cada una de las empresas, no se puede predicar que los dineros le pertenezcan a cualquiera de [ellas], porque los consorcio (sic) tienen autonomía financiera, presupuestal para obligarse (...) inclusive obsérvese que bajo esa autonomía del consorcio con las empresas que lo conforman, se determina un nuevo representante legal, quien suscribe los contratos y adquiere obligaciones", por eso, agregó, el Consejo de Estado determinó que los consorcios sí tienen capacidad para ser parte, lo que confunde el juez de instancia con el hecho de que "(...) las obligaciones y relaciones contractuales del consorcio se vean afectadas por un proceso de reorganización (...)" de una de las empresas que la conforma, ya que, insistió, "(...) EL CONSORCIO AUN (sic) EXISTE, [y] SUS OBLIGACIONES COMO CONSORCIO FRENTE A LOS DEMANDANTES EXISTEN PLENAMENTE (...) MIENTRAS QUE DELEIT EMPRESA [que está] EN REORGANIZACIÓN SOLO TENDRIA OBLIGACIONES DIRECTAS CON LOS DEMANDANTES Y DERECHOS SOBRE LOS DINEROS EMBARGADOS HASTA QUE SE LIQUIDARE (sic) Y LE CORRESPONDIERA LO ATINENTE AL CONSORCIO" (archivo 60, c. 1).

CONSIDERACIONES

Si sólo puede transar, tal y como lo establece el artículo 2470 del Código Civil, "(...) la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción", no admite discusión que los Consorcios no pueden hacerlo, porque este tipo de asociaciones, al no constituirse en debida forma, como, v. gr., una sociedad mercantil, no dan vida a una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, de suerte tal que carecen de capacidad para ser parte en un proceso, pues, a voces del artículo 53 del Código General del Proceso, pueden serlo, entre otros, las personas naturales y jurídicas.

Los consorcios, en efecto, están investidos, por disposición legal, de capacidad para celebrar contratos con las entidades del estado (artículo 6º Ley 80 de 1993), pero ello "(...) a la postre no va más allá de autorizar la vinculación contractual de las entidades pública con las personas

naturales o jurídicas que acudan a tales fórmulas convencionales –consorcio o unión temporal– con el fin de contratar con la administración, mediante la presentación de una sola propuesta en la que conjuguen potencial, experiencia, recursos, etc...” (CSJ, SCC, 13 sep. 2006, Rad. 00271-01, reiterada en STC4998-2018, STC13490-2018, entre otras), de ahí que sean los consorciados y no el consorcio los responsables, solidariamente, de las obligaciones derivadas del contrato.

Otra, ciertamente, es la posición del Consejo de Estado.

No obstante, la tesis de esa corporación “(...) sólo está llamada a operar en cuanto corresponda a los litigios derivados de los contratos estatales o sus correspondientes procedimientos de selección (...) dado que la capacidad jurídica que la Ley 80 otorgó a los consorcios y a las uniones temporales se limitó a la celebración de esa clase de contratos y la consiguiente participación en la respectiva selección de los contratistas particulares, sin que, por tanto, la aludida capacidad contractual y sus efectos puedan extenderse a otros campos diferentes, como los relativos a las relaciones jurídicas que, de manera colectiva o individual, pretendan establecer los integrantes de esas agrupaciones con terceros, ajenos al respectivo contrato estatal, independientemente de que tales vínculos pudieren tener como propósito el desarrollo de actividades encaminadas al cumplimiento, total o parcial, del correspondiente contrato estatal” (STC 6 ag. 2020, rad. 2020-00908-01. Se subraya).

Y este no es uno de esos casos, en tanto que los litigios suscitados son ajenos al contrato estatal.

Con todo, si quienes componen hoy el extremo pasivo son las Fundaciones Proservco y Unidad Social Barrio Adentro, habida cuenta que son las únicas destinatarias de la orden de pago, nadie distinto estaba facultado para transar con los demandantes, pues, según lo establece el artículo 312 del Código General del Proceso, sólo las partes podrán transigir la litis.

Y es así, porque su propósito es ponerle fin de manera anticipada al litigio suscitado entre ellas (artículo 2469 Código Civil).

Luego, no era dable impartir aprobación a la transacción, siendo de suyo menester confirmar esta decisión.

Sobre las demás, referentes a la puesta en conocimiento de la Superintendencia de Sociedades del acuerdo y a la notificación de las demandadas, se declarará inadmisibles las apelaciones, como quiera que no aparece en el ordenamiento norma, general o especial, de la cual se desprenda que dichas decisiones son susceptibles de ser rebatidas a través de dicho medio impugnativo.

Recuérdese que el recurso de apelación obedece al principio de taxatividad, según el cual no es pasible de ser ejercido contra proveído alguno que previamente el legislador no haya designado expresamente.

Así que, “(...) en materia de recursos sólo son susceptibles aquellos que la norma, ya general o especial, expresamente autoriza” (C.S.J. Sal. Cas. Civ. STC1097 de agosto 19 de 2014. Rad. No. 2014-01102-01).

Justamente el artículo 321 del estatuto procesal actual, precepto que trata de la procedencia del comentado medio impugnativo vertical, en recta coherencia con el entendido *ut supra*, establece con total claridad, que sólo los autos allí enunciados emitidos en primera instancia serán apelables, enlistando una serie específica de providencias y “[l]os demás expresamente señalados en este Código” (sic).

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el suscrito Juez Doce Civil del Circuito de Bucaramanga,

RESUELVE:

PRIMERO. - CONFIRMAR el numeral segundo del acápite resolutivo proferido el 28 de junio de 2021, en el asunto de la referencia, por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bucaramanga.

SEGUNDO. - DECLARAR inadmisibile el recurso de apelación instaurado contra los numerales segundo, en lo que refiere a la puesta en conocimiento de la Superintendencia de Sociedades del contrato de transacción, y tercero del aparte resolutivo del auto de fecha y procedencia anotadas.

TERCERO. - SIN COSTAS, ya que no aparece acreditado en el expediente que se causaron.

En firme esta decisión, por Secretaría, remítase el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

Firmado Por:

Hernan Andres Velasquez Sandoval

Juez Circuito

Juzgado De Circuito

Civil 012

Bucaramanga - Santander

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **211d26af1ec35a63a9fa3ed8c483f0de92ee8f630453e716fc9a335d88380c05**

Documento generado en 13/01/2022 10:44:57 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>